



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Rama Judicial

Auto interlocutorio	08l
Radicado	05266-31-03-001-2019-00226-00
Procedimiento	Ejecutivo conexo al 2014-00616
Demandante (s)	Ramón Elías Cardona
Demandado (s)	José Manuel Cardona Tangarife
Asuntos	No repone auto que negó apelación – Se concedió recurso de queja – No repuso auto que ordenó la entrega inmediata del vehículo de placas SJT055 ni concedió apelación

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE  
ENVIGADO

Veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno

Se decide el recurso de reposición presentado por la apoderada judicial de la parte demandante, respecto del auto del 27 de febrero pasado.

I. CONSIDERACIONES:

1. Como el referido recurso está orientado a dos (2) finalidades distintas: una a que se conceda el recurso de apelación que fue negado y, otra, a que se revoquen decisiones nuevas que se tomaron en la providencia impugnada, se analizarán independientemente.

1.1 Afirma la apoderada que *“resulta lamentable... que el despacho considere que NO CONCEDE APELACIÓN por cuanto presuntamente el escrito de reposición no encasilla dentro de los AUTOS QUE ADMITEN APELACIÓN, pasando por alto el señor juez a quo que decidir LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES sobre el vehículo SJT055 y a la vez la del REMOLQUE R41526 por las razones que fueran, hacen a un auto sujeto de apelación en subsidio como sucede en el caso que nos ocupa (ART. 321 NUMERAL 8 DEL C.G.P.)”*.

Pues bien, en primer lugar, nunca se dijo que el escrito de reposición no encasilla dentro de los autos que admiten apelación, expresión ésta totalmente incoherente y producto de la imaginación de la apoderada judicial.

Lo que se expresó fue que como el recurso de reposición que interpuso dicha apoderada contra el auto del 15 de enero pasado, no versó sobre el levantamiento del embargo del tractocamión de placas SJT055, no se concedía el recurso de apelación. En otras palabras, al no haber inconformidad sobre ese levantamiento, esa decisión quedó en firme.

En dicho recurso, toda la argumentación que ofreció la abogada se orientó al tema de la inscripción de la demanda regulada en el art. 590, numeral 1º del C.G. del P., que se ordenó sobre dicho rodante y a la posibilidad de decretar el secuestro, no sobre el embargo; en todo caso, medidas cautelares totalmente distintas entre sí.

Ahora, el motivo por el cual se negó el recurso de apelación respecto de la orden dada de entregar el tráiler R41526 a quien lo tenía al momento de la retención del mismo, esa providencia, por ese aspecto, no es apelable, pues no se está resolviendo “sobre una medida cautelar”, el que sí sería apelable, según el numeral 8 del art. 321 *ídem*.

Es que vuelve a incurrir en imprecisiones dicha apoderada, pues lo que se dijo en el auto del que venimos tratando fue, simplemente, que este tráiler no podía haber sido ni retenido, ni sobre él practicarse diligencia de secuestro, como lo hizo el inspector de policía comisionado, por la sencilla razón que lo único que se ordenó secuestrar fue la “*posesión material* que el demandado José Manuel Cardona Tangarife tiene sobre el vehículo de placas TTG253”. Independiente, en todo caso, de que eventualmente pudiera ser objeto de una diligencia de secuestro o de entrega, cuestión, que se repite, no fue objeto de análisis.

Insiste la apoderada recurrente, en que sobre este vehículo sí recae medida cautelar “*diligencia de secuestro*”, basándose en el despacho comisorio 053 dirigido al Sr. Alcalde Municipal de Dosquebradas (Risaralda), pero omite –no se sabe si maliciosamente o por error–, que el auto del 21 de agosto del 2021 –que comisionó a esa autoridad para el secuestro del tracto camión de placas SJT055 y del tráiler R41526–, fue dejado sin valor, mediante el auto del 8 de octubre del 2019, el cual se encuentra en firme, pues ningún recurso se interpuso frente al mismo. Pero, en todo caso, al inspector de tránsito de Bello –se insiste– **nunca se lo comisionó para que practicara diligencia de secuestro de ese tráiler.**

En el escrito de reposición, sobre este tópico, la abogada anotó:

*“... es más, en caso de su señoría INSISTIR en que el mismo debe ser devuelto a la persona que se LO ENTREGÓ AL SECUESTRE, debe hacerle entrega a mi mandante SR. RAMON ELIAS PEREZ CARDONA, toda vez que fue él mismo él (sic) que se lo entrego (sic), pues lo tenía guardado en el mismo parqueadero PARQUE INTEGRAL DE BELLO y a efectos que no generara doble MENSUALIDAD DE PARQUEO le solicito (sic) al administrador le permitiera GRAPARLO DEL CABEZOTE y así entregárselo al secuestre, entonces aquí no hay objeción alguna señor Juez por parte de ningún tercero afectado (...).”*

Lo dicho por esta profesional del derecho, es, sin duda, el reconocimiento de que con ese proceder, se indujo en error a un funcionario administrativo, que estaba cumpliendo funciones jurisdiccionales, razón por la cual se adicionará el auto impugnado, en el sentido de que se compulsarán copias del expediente con destino a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si, eventualmente, se cometió también un ilícito penal.

En conclusión, lo que hizo este Juzgado fue ejercer un control de legalidad sobre dicha diligencia de secuestro realizada por la Secretaría de Movilidad de Bello –Inspección Civil y Penal, conforme al art. 40 *ib*, pues **excedió sus facultades** al hacer extensivo el secuestro respecto de un bien que no se ordenó secuestrar, lo que es nulo, decisión que “sólo [es] susceptible de reposición”, el cual, dígame de una vez, ya se resolvió, precisamente en el auto que es objeto de impugnación, por lo que no es procedente, otro recurso de reposición<sup>1</sup>.

En este aspecto, no se revocará la providencia objeto de reposición, pero se concederá el recurso de Queja (art. 353 *ibidem*).

1.2 En lo que respecta a la reposición del auto que negó el secuestro del remolque R41526 y del vehículo de placas SJT055, se tiene:

1.2.1 La afirmación realizada en cuanto al primer rodante, en el sentido de que no es objeto de este proceso, hunde sus raíces en el hecho -incontrastable-, de que en el contrato celebrado por las partes –objeto de la pretensión de incumplimiento contractual- **no se describió el mismo**; Sólo se **detalló el tracto camión**. Del mismo defecto adolece el escrito de demanda: ni en los hechos ni en las pretensiones, se individualizó el remolque.

Esa circunstancia, fue detectada por el suscrito juez en la audiencia de fallo, a raíz de la petición de aclaración de la sentencia realizada por la apoderada judicial del demandante.

Esto fue lo que se resolvió al respecto:

---

<sup>1</sup> “El auto que decide la reposición **no es susceptible de ningún recurso** (...)” (art. 318 del C.G. del P.).

*“Se precisa que la restitución que debe hacer el demandado es conforme a lo que fue pactado o, por lo menos, se dice que fue entregado en el contrato; ahí se describe que fue entregado el tracto camión, marca Kodiak, modelo 2007, color azul Europa, Tipo Remolque, capacidad 2 PSJ, 19 toneladas, servicio público, No. de puertas 2, motor 9Z30346, chasis 9GDF7H1CO7B005924, placas SJT055 y, atendiendo a lo que dice en la parte de la cláusula adicional, que hace parte de un cabezote y de un tráiler; no hay más características, a eso se debe circunscribir la restitución, o sea que en ese sentido se precisa que conforme a lo que se dice en el contrato – características, incluyendo, lo que dice ahí ´cabezote y trailer”.*

En esa medida, entonces, se fue muy claro: la restitución del tráiler se atiene a lo que “*fue pactado*”; a lo que “*se dice fue entregado en el contrato*”; a lo que “*se dice en el contrato – características*”. Nunca se dijo que se restituyera el tráiler de placas R41526. Hay total coherencia entre lo que se dijo en la audiencia del 5 de julio del 2019 y lo expresado en el auto del 26 de febrero pasado, ahora impugnado.

Así pues, no se trata de “*desacertadas conclusiones tan repetitivas, a veces llego a pensar que estamos mirando un proceso diferente, las apreciaciones tan disímiles que tenemos del mismo*”, como acotó la abogada.

Simplemente ocurre, que aquélla pretende endilgarle errores al juzgado, cuando éstos se generaron en el contrato celebrado por las partes y, sobre todo, en el escrito de demanda. Este es, sin duda, un caso de imposibilidad de cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.

1.2.2 En lo tocante con las aseveraciones relacionadas con el “*secuestro*” del vehículo de placas SJT055, en el sentido de que se le está violando el derecho de defensa porque el juzgado está resolviendo “*en PRIVADO*” sin haberle dado traslado de la petición del señor Libardo Cardona; que “*no se adelanta ningún*

PROCEDIMIENTO DE OBJECIÓN A LA POSESIÓN conforme lo estipula el artículo 596 del CGP” y, que “en un análisis netamente privado ACCEDE A SU OPOSICIÓN”, valgan las siguientes apreciaciones:

Con este rodante ocurrió exactamente lo mismo que con el tráiler: fue retenido en forma ilegal por la abogada Mónica Paola Rueda Arias, pues –como se dejó dicho-, no existe orden vigente de secuestro ni de entrega respecto de él, ya que la que existió, fue revocada o dejada sin efectos desde el 8 de octubre del 2019, auto que se notificó por estado #180 del 19 de diciembre del mismo año.

Así justificó aquélla este procedimiento, en escrito de contestación de la acción de tutela presentada por el señor Libardo Antonio Cardona Gallego, radicado 05001-22-03-000-2020-00461-00:

“ (..) la policía nacional a quien equivocadamente integraron como sujeto pasivo de esta acción, no hizo nada diferente que acudir a mi llamado a la línea 123 para ofrecer acompañamiento a la reunión que tendríamos con el señor Libardo Cardona Gallego, el cual nunca llegó, manifestando que en razón a la edad enviaba a su hijo como representante, Sr. Juan Cardona y a su conductor Jesús Pérez, los cuales voluntariamente y sin ningún tipo de objeción entregaron las llaves del vehículo (..)”.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en su contestación de la tutela, sobre el particular dijo:

“La abogada solicita a los funcionarios de policía *hacer un acompañamiento para evitar alguna represalia puesto que se iba a notificar al señor Libardo Cardona de una orden de secuestro en contra del vehículo (...), el cual es requerido mediante oficio 681 de fecha 4 de octubre de 2020, librado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado, en el proceso radicado 2014-00616*”.

Pero para la fecha en que se solicitó el mencionado “acompañamiento” -2 de noviembre del 2020- no había ninguna orden de secuestro vigente. Es más, el oficio que les exhibió a los policías, el #681 del 14 de octubre del 2020, estaba dirigido a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas (Risaralda) (folios 146 del cuaderno contentivo del proceso verbal) y no hace mención a ninguna diligencia de secuestro ¿No es esto, inducir en error a un funcionario público? Estimo que sí, pero no soy el competente para determinarlo

En este procedimiento, o la abogada engañó a los agentes de policía o éstos actuaron en complicidad con aquella<sup>2</sup>, pues nadie pide un acompañamiento – ni tampoco éste se debe prestar-, simplemente para tener “una reunión” con alguien. Y lo que es más grave, exhibirles una presunta “orden judicial” de secuestro, que no tiene absolutamente nada que ver con esa medida cautelar; y sobre todo, sabiendo que la orden de secuestro que se había proferido en el año 2019, ya se había dejado sin efectos; lo que adquiere mayor relevancia, pues la abogada aún esgrime –como lo está haciendo en el recurso que se resuelve- como justificación de su actuar, un despacho comisorio –el #053 del 28 de agosto del 2019-, que no está vigente.

Para el suscrito Juez no existe duda que el procedimiento empleado por la abogada Rueda Arias, haciéndose “acompañar” de la policía dizque para “una reunión”, fue irregular, pues el mismo le imprimía una aparente legalidad al acto, ya que estaban participando agentes del Estado. La sola presencia de ellos, avalaba que el procedimiento que se iba a hacer era legal; generaba la creencia que efectivamente la tractomula tenía orden de secuestro y que por tanto, iba a ser objeto de aprehensión.

El hecho de que los policiales después se hayan retirado del lugar y que no hayan participado del traslado del rodante al parqueadero, no le quita la

---

<sup>2</sup> Por eso se ordenó compulsar copia de lo actuado para que se adelante una investigación disciplinaria contra los agentes de policía.

ilegalidad al acto, pues la finalidad ya estaba cumplida: Darle visos de legalidad a un acto irregular o ilegal.

La tantas veces mencionada profesional del derecho, pretende hacer ver que existió un acuerdo de voluntades para la entrega del automotor, el que fundamenta en el art. 595, regla 2º, del C.G. del P.

Pero es que esa norma no tiene ninguna aplicación para el caso: en primer lugar, por la sencilla y elemental razón de que el secuestro no ha sido ordenado por el Juzgado y, en segundo lugar, porque el acuerdo –de designar secuestre-, debe provenir de “las partes”, es decir, para el caso, del demandante, Ramón Elías Pérez Cardona, y del demandado José Manuel Cardona Tangarife, último que no participó del acuerdo de voluntades. Pero lo que más llama la atención, es que en el documento que se elaboró, se diga que en él actuó “*el señor Juan David Cardona, quien manifiesta ser el propietario del vehículo y actual poseedor*”, pero que “*el señor Juan David Cardona al final no accedió a firmar, de lo cual dan fe y constancia los agentes de policía abajo firmantes*”. Entonces, a ¿a qué acuerdo de voluntades se está refiriendo? Si alguien se niega a firmar, es porque no está de acuerdo ¿Esta situación, por sí sola, no debió alertar a los policiales?

Pero también llama la atención, el hecho de que la abogada, al contestar la tutela, haya indicado que el señor Juan David Cardona asistió a la reunión como representante del señor Libardo Antonio Cardona Gallego, pero en el documento se diga cosa distinta, que es propietario.

Para el suscrito Juez, el consentimiento de los terceros, para asentir el procedimiento adelantado por la abogada, está en serias dudas; pero, en todo caso, no solo no tiene ningún valor por no provenir de todas las partes sino que el mismo tenía una única justificación: procurar que no se causara un mal



mayor y que el vehículo estuviera en un parqueadero debidamente asegurado, si era cierto que había orden de secuestro.

Este panorama, era obviamente desconocido por este juzgador, hasta que a finales del año pasado, fue notificado de una acción de tutela tramitada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, presentada por el señor Libardo Antonio Cardona, donde se daba cuenta que, el 2 de noviembre del año pasado, mientras el vehículo de placas SJT055 prestaba servicios en la empresa de transporte Botero Soto, acudió una abogada y policías a efectos de llevarse el tracto camión de su propiedad sin presentar documento alguno, no se realizó la diligencia mediante secuestro y tampoco se permitió oposición ni se levantó acta del hecho.

El Tribunal declaró improcedente el amparo constitucional, basado, en esencia, en que el accionante - contrariando el principio de subsidiaridad de la acción de tutela- no había agotado los recursos judiciales de que disponía, como era presentar ante esta dependencia una oposición. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, si bien confirmó la decisión, no lo hizo por el no cumplimiento del requisito de subsidiaridad sino por falta de legitimación en la causa: *“También debe indicarse que por sustracción de materia, innecesario se hace un análisis adicional de los argumentos expuestos en la impugnación por la autoridad judicial censurada, pues más allá que el fallo de primer grado sea mantenido, lo cierto del caso es que el criterio para tal determinación lo es la falta de legitimación en la causa por activa del aquí interesado, más no el de subsidiaridad adoptado por el a quo constitucional, punto nodal de su réplica”*.

Ante la no prosperidad de la acción de tutela y en razón de la petición presentada por el señor Cardona -que no debe entenderse como una oposición, como se explicará más adelante-, el suscrito Juez decidió ordenar la devolución de la tracto mula a quien la tenía al momento de ser retenida, en

razón a la evidente ilegalidad de su retención, a fin de restablecer el derecho fundamental a un debido proceso de aquél, pues el amparo constitucional que había solicitado –que en mi concepto debió prosperar- fue declarado improcedente.

Y se dice que la petición del señor Cardona Gallego no se trata de la oposición regulada en el art. 596 del C.G. del P., que remite al 309 de la misma obra – como lo afirma la apoderada judicial en su escrito de impugnación-, por la elemental razón de que no existe diligencia de secuestro.

Por ello, no se le dio a la parte demandante ningún traslado –que no debía dársele-, lo que no significa que el despacho esté “*resolviendo (...) en PRIVADO*”, como lo alega la abogada; la decisión correspondiente fue notificada por estado, por lo que se le dio publicidad, descartando cualquier violación al debido proceso del actor. En todo caso -se insiste- no se accedió a ninguna oposición; simplemente, el suscrito Juez, cumpliendo con los deberes que le impone el art. 42 del C.G. del P. de “*dirigir el proceso, velar por su pronta resolución (...) prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal*” y, sobre todo, “*realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso*”, ejercitó un control de legalidad sobre ese proceder.

Por todo lo anterior, las decisiones de este Juzgado no ha sido –como lo sostiene la togada- “*temerari[as]*” ni tampoco son el producto “*de una cadena de errores por parte de su mismo despacho*” y mucho menos, se está “*haciendo parecer como INEXISTENTES ORDENES QUE EL MISMO JUZGADO DECRETÓ, y en cuya confianza nos posamos para actuar, tanto la suscrita abogada como la POLICIA NACIONAL, pues en apremio de la buena fe se interpretan las DECISIONES DE UN JUEZ como correctas, y ajustadas a derecho*”.

En todo caso, como última reflexión, se advierte que la retención ilegal, arbitraria de los vehículos ya referidos, así en el futuro se pueda llegar a ordenar una entrega o un secuestro respecto de ellos, no puede servir de argumento para alegar que, por economía procesal-, solamente se debe comisionar para la correspondiente diligencia, porque ello sería permitir que un acto viciado por desconocimiento de derechos fundamentales, como el debido proceso, sirva de fuente para la práctica de una posterior diligencia judicial. Esto es simplemente desarrollo de lo que en la doctrina y la jurisprudencia, se conoce como teoría del fruto del árbol envenenado<sup>3</sup>.

No se repondrá, pues, la decisión de entrega del vehículo de placas SJT055, ni tampoco se concederá el recurso de apelación, pues tal providencia no es apelable, en la medida en no se está resolviendo sobre una medida cautelar sino sobre un acto de retención ilegal de un vehículo sin existir orden judicial.

2. Finalmente, en cuanto a la petición de analizar la *“errada decisión de considerar merito (sic) para compulsar copias”* a la abogada, basta significar –como quedó anotado- que es un deber del Juez *“denunciar”* los actos contrarios a la *“dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal”*, por lo cual, si se está concluyendo que aquella actúo en forma arbitraria e ilegal y, además, que al parecer indujo a funcionarios públicos a actuar en contra de la ley, se mantendrá la orden de compulsas de copias, adicionándola en el sentido de que también serán enviadas a la Fiscalía General de la Nación para que determine si con el actuar de la profesional del derecho y de los policías, se incurrió en algún ilícito penal, como fraude procesal o prevaricato.

---

<sup>3</sup> *“Lo imperativo del planteamiento determina que se haga extensivo a las pruebas ilícitas que provienen de una ilícita, concepción conocida como fruit of the poisonous tree doctrine (doctrina del fruto envenenado). Como el árbol envenenado produce frutos, igualmente envenenados, la ilicitud inicial de la prueba contamina o se extiende a todas las que se deriven o provengan de ella”* (Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal, Editorial Temis, 2015, pág.12.

## II. DECISIÓN:

Por lo expuesto, se

### RESUELVE:

1. No reponer el auto del 27 de febrero pasado, en cuanto negó el recurso de apelación frente a la decisión que ordenó la entrega del tráiler de placas R41526 a quien lo tuviera en el momento de la retención ilegal y al desembargo del tracto camión de placas SJT055.
2. Conceder, en relación con estos mismos asuntos, el recurso de queja, por lo cual se le enviará a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, el expediente digital.
3. Negar el recurso de apelación interpuesto contra esa misma providencia, en lo relativo a dejar sin ningún valor la diligencia de secuestro que respecto del remolque practicó la Secretaría de Movilidad de Bello –Inspección Civil y Penal.
4. No reponer el numeral cuarto de dicha providencia, que ordenó entregarle al señor Libardo Cardona Gallego el vehículo de placas STJ055.
5. Negar la concesión del recurso de apelación frente al mismo asunto.
6. Complementar el numeral quinto de la parte resolutive del auto impugnado, en el sentido de que las copias que se ordenan compulsar también tienen como destino a la Fiscalía General de la Nación para que determine si con el actuar de la profesional del derecho y de los policías, se incurrió en algún ilícito penal, como fraude procesal o prevaricato.

NOTIFÍQUESE



GERMÁN ALONSO FLOREZ HINCAPIÉ  
JUEZ

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado  
No. 31, fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a  
las 8 a.m.

Envigado, 5 abril del 2021



Tatiana Corrales Ramírez  
Secretaria